

La fragmentación criminal no es el fin del problema: es su multiplicación

Por qué la caída de cúpulas criminales puede generar más violencia que la que pretende resolver

Douglas Farah y Pablo Zeballos

Existe en América Latina una narrativa dominante que celebra la captura de líderes criminales como **victorias definitivas**. Es una narrativa heredada de los años 80, forjada en la lucha contra los grandes cárteles colombianos: atractiva, sin duda; funcional al relato político; y muy rentable para la épica mediática y las series de televisión. Cada vez que cae un capo, un narcotraficante de alto perfil o un gobernador corrupto, se reactiva el mismo guion esperanzador: el Estado recupera terreno, la justicia avanza, el crimen retrocede.

Sin embargo, la evidencia empírica cuenta una historia muy distinta. Lo que suele presentarse como el final de un problema es, en realidad, **el inicio de una reconfiguración**: más violenta, más fragmentada y, en muchos casos, más difícil de contener. Las consecuencias iniciales, como ocurre casi siempre, recaen primero sobre las comunidades más abandonadas y vulnerables; pero con el tiempo ese desorden criminal se expande, permea al conjunto de la sociedad y termina configurando una **democracia transaccional**, sostenida por un **Estado de derecho flexible y adaptable**, capaz de convivir —más que de confrontar— con las lógicas del crimen organizado.

La reciente detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Venezuela ilustra con nitidez esta paradoja. Lejos de significar el colapso del crimen organizado venezolano, este hecho marca más bien **el fin de un modelo de protección centralizada** y el inicio probable de una **atomización criminal acelerada**. No solo de las estructuras criminales visibles, sino también del poderoso **holding criminal político-militar** que, durante décadas, se consolidó en la élite venezolana y que con el tiempo fue revestido de nombres funcionales y atractivos —como el llamado “*Cártel de los Soles*”—, aunque en realidad se trata de algo mucho más complejo que una simple etiqueta.

Cuando un Estado capturado pierde a su garante superior —o a quien creía ejercer ese rol—, no desaparecen las economías ilícitas ni se disuelven las redes territoriales que las sostienen. Lo que ocurre es mucho más complejo y peligroso: **se rompen los equilibrios informales**, los liderazgos locales quedan liberados del arbitraje central y se abre una disputa abierta por territorios, rutas y rentas. Esa disputa puede desplegarse con o sin una cáscara ideológica. Ya lo hemos visto antes, tanto en la fragmentación de las FARC como en la sucesión criminal tras la caída de *El Chapo* Guzmán.

Por ello, este proceso no es exclusivo de Venezuela. Es una dinámica recurrente en toda la región, observable allí donde confluyen fragilidad institucional, economías ilícitas rentables y territorios socialmente vulnerables. México post-Calderón, Colombia después de Pablo Escobar, Brasil tras las intervenciones en las favelas: en todos estos casos, la fragmentación inicial no condujo a un debilitamiento sostenido del fenómeno criminal. Por el contrario, la presión competitiva depuró el ecosistema, favoreciendo a los actores más violentos, organizados y adaptativos.

La lógica es brutal pero consistente. Cuando se elimina o captura a un líder visible sin dismantelar las estructuras que lo sostienen, se desata una competencia darwiniana entre los grupos sobrevivientes. Aquellos que logran imponerse no son necesariamente los más ideológicos ni los más leales a un proyecto político: son los más eficaces en el uso de la violencia, los mejor conectados con redes transnacionales y los más capaces de ofrecer gobernanza criminal donde el Estado no llega.

En el caso venezolano, el riesgo se amplifica por tres factores estructurales. Primero, la existencia de colectivos armados que durante años operaron como brazos operativos del régimen, pero que hoy podrían redefinir sus lealtades y priorizar su supervivencia territorial. Segundo, un sistema penitenciario que desde 2004 funciona bajo lógicas de autogobierno, transformando las cárceles en centros de mando criminal con capacidad de proyectar violencia hacia el exterior. Tercero, la circulación descontrolada de armamento, potenciada por políticas de rearme civil y por la ausencia de trazabilidad sobre las armas distribuidas.

Estos tres elementos no permanecen confinados dentro de las fronteras venezolanas. Se desplazan, se intercambian y se integran a mercados ilegales regionales. Organizaciones como el Tren de Aragua no esperaron el colapso de Maduro para expandirse: ya operan como franquicias criminales transnacionales con presencia documentada en al menos diez países. La crisis actual no las debilita, las libera de cualquier arbitraje residual que pudiera limitar su autonomía operativa.

Para los países de la región, este escenario plantea un desafío que trasciende con creces la agenda migratoria o la seguridad fronteriza. No se trata solo de controlar flujos de personas, sino de **anticipar la importación de conflictos no resueltos**, portadores de códigos de violencia y modelos de control territorial que ya han demostrado su eficacia en otros contextos.

El crimen organizado contemporáneo no es solo delincuencia. En muchas zonas **gobierna, comunica y se inserta socialmente**, y lo más grave es que, en no pocos casos, lo hace con la aceptación —cuando no el respaldo— de comunidades que el Estado abandonó durante décadas. Cuando ese umbral se cruza, la respuesta policial tradicional resulta insuficiente; la respuesta militar suele terminar siendo funcional al propio crimen; y la respuesta estatal, en demasiadas ocasiones, se degrada en **corrupción intermedia**, tolerancia selectiva o pactos informales que consolidan el problema en lugar de resolverlo.

La principal lección estratégica es incómoda pero necesaria: el crimen organizado no depende solo de líderes visibles. Depende de estructuras, economías ilícitas y vacíos de gobernanza. Cortar la cabeza sin intervenir el cuerpo solo acelera la mutación. Y en un contexto de fragmentación, los grupos que sobreviven emergen más violentos, más cohesionados y mejor adaptados a las nuevas condiciones.

¿Estamos ante una oportunidad o ante un riesgo mayor? Ambas cosas. Es una oportunidad para anticipar, fortalecer inteligencia criminal y construir cooperación regional efectiva. Pero si la respuesta llega tarde o se limita exclusivamente al uso de la fuerza, el riesgo es que el crimen organizado aprenda más rápido que el Estado. Y cuando eso sucede, la fragmentación de hoy se convierte en la consolidación criminal de mañana.

La caída de Maduro no es el fin de un ciclo. Es, probablemente, el inicio de otro más complejo. La pregunta no es si habrá consecuencias, sino si estaremos preparados para gestionarlas antes de que sea demasiado tarde.